III. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Primera Instancia número Tres de Totana

4990 Divorcio contencioso 50/2007.

3839M

N.I.G.: 30039 1 0300534 /2007

Procedimiento: Divorcio contencioso 50/2007

Sobre: Otras materias.

De: Kelly Ann Harper

Procuradora: Josefa García Sánchez

Contra: Darren Harvey Harper

Procurador/a Sr/a. Sin profesional asignado

Que en los autos de Divorcio Contencioso n.º 50/07 tramitados en este Juzgado se ha dictado con esta fecha la siguiente resolución:

Primera Instancia e Instrucción número Tres Totana

Sentencia: 00009/2009

De: Kelly Ann Harper

Procuradora: Josefa García Sánchez.

Contra: Darren Harvey Harper

Divorcio contencioso 50/2007.

Sentencia

En Totana, a trece de febrero de 2009.

Vistos por doña María de los Ángeles Martínez Urrea, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Totana y de su partido judicial, los autos del Divorcio Contencioso 50/07, en virtud de demanda interpuesta por doña Kelly Ann Harper, representada por la Procuradora Sra. García Sánchez y asistida por el Letrado Sr. Sánchez Lorente, contra D. Darren Harvey Harper, en situación de rebeldía procesal.

Antecedentes de hecho

Primero.- La Procuradora de los Tribunales Sra. García Sánchez, en nombre y representación de D.ª Kelly Ann Harper, interpuso demanda contra D. Darren Harvey Harper, por la que solicitaba la disolución por divorcio del matrimonio de ambos, contraído en Aylesford, County of Kent, Gran Bretaña, el 10 de junio de 1995, inscrito en el Registro Civil del Distrito de Maidstone, y que se adoptaran como medidas definitivas las recogidas en el "suplico de su demanda". De dicho matrimonio existen dos hijas menores de edad: Tegan Harper, nacida el 20 de agosto de 1997, en Maidstone Kent, Gran Bretaña, y Macy Harper, nacida el 13 de septiembre de 2000 en Maidstone Kent, Gran Bretaña, según consta en las certificaciones de nacimiento del Registro Civil de Maidstone.

Segundo.- Por auto de 25 de mayo de 2007 se admitió a trámite la demanda y se dio traslado al demandado y al Ministerio Fiscal, emplazándole para que contestara en un plazo de veinte días.

El Ministerio Fiscal contestó a la demanda por escrito de fecha 13 de junio de 2007.

El demandado no pudo ser emplazado al resultar desconocido su paradero. Después de practicar sin éxito las diligencias previstas en el artículo 156 de la L.E.C. para la averiguación de su paradero, fue emplazado por edictos, siendo declarado en rebeldía por providencia de fecha 10-10-08, notificada igualmente por vía edictal.

Tercero. La vista se celebró el día 8-01-09, con asistencia de la parte actora y el representante del Ministerio Fiscal. La parte actora ratificó su demanda y solicitó el recibimiento del pleito a prueba, con el resultado que consta en el acta. El Ministerio Fiscal solicitó el interrogatorio de la demandante. Practicada que fue la prueba se dio traslado a las partes para formular brevemente sus conclusiones en base al resultado de la prueba practicada, como consta en el acta del juicio recogido en soporte apto para la grabación y reproducción de la imagen y el sonido, quedando los autos para dictar sentencia.

Cuarto.- En el presente procedimiento se han cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.- La parte actora solicita la disolución por divorcio de su matrimonio, contraído con el demandado en Aylesford, County of Kent, Gran Bretaña, el 10 de junio de 1995, inscrito en el Registro Civil del Distrito de Maidstone, Gran Bretaña.

Ambos cónyuges son de nacionalidad británica y residían en Mazarrón, Murcia, en el momento de interponer la demanda de divorcio.

Según el artículo 107 del Código Civil, la legislación aplicable para resolver sobre el divorcio es la inglesa, al tratarse de la Ley nacional común de los cónyuges en el momento de presentar la demanda.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se requirió a la parte actora para que acreditara el contenido y vigencia del Derecho inglés que resulta aplicable para resolver sobre la disolución de su matrimonio por divorcio y los efectos derivados del mismo. La parte actora aportó debidamente traducida la Ley inglesa sobre causas matrimoniales (Matrimonial Causes Act), de fecha 23 de mayo de 1973, vigente en la actualidad, cuyo Capítulo 1 establece un sistema causal (similar al previsto en nuestro Código Civil antes de la reforma operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio) según el cual, para decretarse el divorcio del matrimonio, deben acreditarse alguna de las causas legalmente establecidas, que ponen de manifiesto la ruptura irremediable del mismo. Así, la Ley inglesa dispone: "Conforme al artículo 3 de la presente Ley, cualquiera de los cónyuges puede presentar una demanda de divorcio ante un tribunal alegando que el matrimonio se ha roto irremediamente. El tribunal que entienda de la demanda de divorcio no considerará que el matrimonio se ha roto irremediamente a menos que el demandante justifique ante el tribunal uno o varios de los hechos siguientes, a saber: 2.b) que el comportamiento del demandado reduce razonablemente las posibilidades de que el demandante viva con él. Si las pruebas aportadas ante el tribunal justifican alguno de los hechos estipulado en el subartículo 2 precedente, el tribunal dictará una sentencia de divorcio, a tenor de los artículos 3 y 5 de la presente Ley, a menos que todas las pruebas apunten a que el matrimonio no se ha roto irremediamente".

Segundo.- En el presente caso, el hecho de que el demandado haya sido declarado en situación de rebeldía procesal, no supone, como dispone el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda. En consecuencia, los hechos invocados por la parte demandante como fundamento de su pretensión se consideran controvertidos y necesitados de prueba.

Resulta acreditado, a pesar de la ausencia del demandado, mediante la documentación aportada al procedimiento, que el Sr. Harper incurrió en una conducta hacia su esposa que dio lugar a la incoación de un procedimiento penal por malos tratos (Diligencias Previas n.º 924/06 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Totana), en los que también utilizó violencia sexual, y que en base a los hechos denunciados se acordó la prisión provisional del Sr. Harper y por auto de fecha 6 de julio de 2.006 se adoptó una orden de protección en la que se le prohibía acercarse a menos de 300 metros de la Sra. Harper.

Desde ese momento, hace más de dos años, y con motivo de la conducta violenta del demandado hacia su esposa, que además de ser constitutiva de infracción penal, supone la vulneración de los más elementales deberes asociados a la convivencia conyugal, se puso fin de hecho a la convivencia del matrimonio, sin que la denunciante haya vuelto a tener noticia alguna del Sr. Harper desde su ingreso en prisión, siendo ésta sin duda una situación que pone de manifiesto que la convivencia matrimonial se halla irremediadamente rota y que no va a reanudarse, existiendo, a la vista de la documental aportada y de la declaración de la Sra. Harper, una causa justificada para decretar el divorcio del matrimonio, al amparo de la ley personal común de ambos cónyuges.

Tercero.- En cuanto a las medidas que han de adoptarse en relación a los efectos de la disolución del matrimonio, el Capítulo 11 de la Ley inglesa dispone (artículo 21) que con objeto de ajustar la situación económica de los cónyuges y de los hijos de la familia en caso de divorcio, se pueden adoptar disposiciones económicas periódicas o a tanto alzado, a favor de uno de los cónyuges o a favor de los hijos de familia (artículo 23, e y f) para atender al sustento de éstos.

Existiendo esta previsión en la Ley inglesa, y no constando los criterios que exige dicho ordenamiento jurídico para determinar la cuantía de la pensión de alimentos a favor de los hijos menores, procede aplicar supletoriamente nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la doctrina jurisprudencia) establecida por nuestro Tribunal Supremo (SSTS de fecha 5 junio de 2000 y 17 julio de 2001). En base a los artículos 142 y 146 de nuestro Código Civil, la cuantía de la pensión de alimentos ha de ser suficiente para atender a las necesidades de sustento, habitación, vestido, educación y asistencia médica de las menores, así como proporcionada al caudal y medios de quien viene obligado a prestarla.

En este sentido, no consta en este momento la situación económica del demandado, el cual estuvo dado de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2006. No por ello se debe dejar de fijar una pensión para atender a las necesidades de las menores, considerando que procede una cantidad de 200 euros mensuales para cada hija, habida cuenta que no existe ningún elemento indicativo de la capacidad económica del padre y que se considera una cantidad suficiente para atender a las necesidades de las menores, que desde hace dos años están siendo sufragadas íntegramente por la madre. Tal cantidad deberá ser abonada en la cuenta designada al efecto por la Sra. Harper, antes del día cinco de cada mes. Esta pensión se actualizará

anualmente en proporción al aumento del índice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.

Los gastos extraordinarios de las hijas, consistentes en gastos de asistencia sanitaria, médicos y quirúrgicos no cubiertos por el sistema general de Seguridad Social; gastos relativos a campamentos, viajes de estudios, estudios superiores, serán satisfechos por mitad entre ambos progenitores.

Cuarto.- Patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas y comunicación. El artículo 9.4 del Código Civil dispone que la ley que regula los efectos de las relaciones paterno filiales es la ley personal del hijo y, si no pudiera determinarse ésta, se estará a la residencia habitual del hijo. Al no resultar acreditada en la causa la regulación del Derecho inglés para las relaciones paternofiliales, y tener las menores su residencia habitual en España, donde conviven con su madre, es procedente la aplicación de nuestro Derecho sustantivo para adoptar las medidas relativas a la guarda y custodia de las menores, la cual seguirá ejerciendo la madre, en interés de las mismas, manteniéndose la patria potestad compartida pero atribuyendo el ejercicio de la misma exclusivamente a la madre custodia, a la vista de las circunstancias del caso y de la ausencia del padre (artículos 156 y 159 del Código Civil).

El artículo 94 del Código Civil dispone "El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por resolución judicial". En la orden de protección de fecha 6 de julio de 2006, se suspendió el régimen de visitas del demandado con sus hijas menores con carácter provisional, atendida "su agresividad, su adicción a la cocaína y su obsesión por el sexo". En estos momentos, en base a la situación de ilocalizado paradero en la que se halla el demandado, sin que haya sido posible oírlo en este procedimiento y comprobar si subsisten las causas por las que en su momento se acordó la suspensión del régimen de visitas, procede, según lo solicitado por la actora, mantener la suspensión acordada, petición a la que se adhirió el Ministerio Fiscal. Esta decisión se fundamenta en las circunstancias concurrentes, tomando en consideración el interés superior de las menores, de 8 y 11 años, con la finalidad de mantenerlas a salvo de cualquier situación o comportamiento que pueda perjudicar su normal desarrollo y evolución, ante la inexistencia de relación afectiva con su padre desde hace más de dos años, la dejación del mismo de sus deberes para con sus hijas, tanto en relación a sus obligaciones económicas como morales y asistenciales para con las menores, y la situación de malos tratos a su madre en presencia de las menores, según declaró la demandante y consta en el auto de fecha 6 de julio de 2006. Todo ello justifica que se mantenga la suspensión del régimen de visitas, de manera indefinida y sin perjuicio de la posibilidad de que en el momento que el padre aparezca y acredite un cambio sustancial de las circunstancias pueda revisarse esta medida, adoptada en interés de las hijas menores de edad.

En base lo anterior, procede la atribución del uso del domicilio familiar, sito en la urbanización Camposol, C/ Beder, n.º 184, de Mazarrón, a las hijas menores junto con la madre, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Civil, por constituir el interés más necesitado de protección.

Quinto.- No procede la condena en costas a ninguna de las partes, dada la especial naturaleza pública del objeto del proceso.

Sexto.- El artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone "Cuando proceda, las sentencias y demás resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este título se comunicarán de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan". En el presente caso, al no hallarse inscrito el matrimonio disuelto en un Registro Civil español, no procede su comunicación de oficio al Registro Civil, siendo la parte interesada la que puede solicitar el reconocimiento y posterior inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro de Maidstone, County of Kent, Gran Bretaña, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 2201/2003, de 27 de noviembre, sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial.

Fallo

Se estima íntegramente la demanda de divorcio interpuesta por la Procuradora Sra. García Sánchez, en nombre y representación de D.^a Kelly Ann Harper contra D. Darren Harvey Harper.

Se declara la disolución del matrimonio formado por D.^a Kelly Ann Harper y D. Darren Harvey Harper, contraído en Aylesford, County of Kent, Gran Bretaña, el 10 de junio de 1995, inscrito en el Registro Civil del Distrito de Maidstone.

Se acuerdan la adopción de las siguientes Medidas definitivas:

1.º Se atribuya a la Sra. Harper la guarda y custodia de las dos hijas menores de edad del matrimonio, Tegan y Macy Harper, así como el ejercicio exclusivo de la patria potestad.

2.º Se atribuye a las hijas menores y a la madre el uso del domicilio familiar, sito en la urbanización Camposol, C/ Beder, n.º 184, de Mazarrón, Murcia.

3.º Se acuerda la suspensión del derecho de visitas y comunicación con sus hijas menores de D. Darren Harvey Harper, por tiempo indefinido, sin perjuicio de que el padre pueda instar la modificación de este régimen acreditando que han variado sustancialmente las circunstancias que concurren en este momento.

4.º El Sr. Harper deberá abonar 200 euros mensuales en para cada hija, en concepto de pensión de alimentos. Tal cantidad deberá ser abonada en la cuenta designada al efecto por la Sra. Harper, antes del día cinco de cada mes. Esta pensión se actualizará anualmente en proporción al aumento del índice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya. Los gastos extraordinarios de las hijas, serán satisfechos por mitad entre ambos progenitores.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal. Notifíquese la sentencia a la parte declarada en rebeldía mediante edicto, al ser desconocido su domicilio, que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se interpondrá ante este juzgado en el plazo de cinco días a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Darren Harvey Harper, se expide en presente en Totana, 13 de febrero de 2009.—El Secretario.